

A solid orange vertical bar is positioned on the left side of the page, extending from the top to the bottom.

La autonomía de la coerción personal de bajo impacto (En el sistema cautelar del nuevo CPP de Santa Fe)

Dr. Juan Manuel Oliva

Juez de la Cámara Penal de la 5^{ta} Circunscripción Judicial, Rafaela.

Abstract: El CPP de Santa Fe trata la materia cautelar desde la óptica de la teoría general del proceso y, por ello, tanto la aplicación como revisión de una medida de tal naturaleza dependerá de los factores instrumentalidad, proporcionalidad y excepcionalidad. Las cautelares han sido organizadas por el codificador en una parte general y dos partes especiales. La prisión preventiva está regulada en una de estas últimas, pero el resto de las medidas precautorias de índole personal (parcialmente enumeradas en el art. 221) que denominamos medidas de coerción de bajo impacto, se rigen por la parte general, no siendo necesario, para su aplicación, que se reúnan todos los requisitos que se exigen para el dictado de la prisión preventiva (art. 219). Las partes pueden acordar sobre estos tópicos, pero sólo de manera limitada.

El nuevo Código Procesal Penal santafesino (CPP), plenamente vigente a partir del 10 de febrero pasado, va mostrando ya reconocidas fortalezas del modelo al que adscribe y lógicas debilidades de su juventud. Como correlato de ello, los operadores judiciales se enfrentan con problemas novedosos y «también por lógica» deslizan errores al tratar de solucionarlos, pero lejos de permitir que esta realidad conduzca al escepticismo, nos proponemos sumar desde la crítica, o siquiera a través del debate que genere nuestra opinión.

1. Desde esa perspectiva, se advierte que las audiencias que se han esta-

do produciendo hasta el presente son principalmente imputativas «jurisdiccionales» con control de detención, y cautelares de prisión preventiva. En ambas, la materia precautoria, cautelar o asegurativa cobra un singular protagonismo, como suele hacerlo siempre que se trate su implicancia en el proceso, dado que pone en crisis factores que exceden el marco de lo normativo, y más aún el de lo estrictamente legal².

Quedarán para otra vez, sin embargo, las discusiones mayores –por cierto indispensables– del abolicionismo y de la equiparación del encierro de una persona con las cautelares que afectan derechos sobre las cosas. Quedarán para otro ámbito las propuestas de *lege ferenda*, como la del encaje del instituto en un lugar u otro del CPP, según se entienda la naturaleza jurídica que le sea propia. Nos proponemos ahora analizar extremos primordialmente operativos, en el convencimiento de que ello no resulta poco, en tanto que la inteligencia que se otorgue a la ley vigente, y las rutinas y destrezas de trabajo que construyan los operadores a partir de estas interpretaciones, determinarán el modo como la coerción personal «cautelar»³ influya sobre la vida y la libertad de las personas sometidas a proceso penal.

En esa tarea, entonces, cabe formular como primera afirmación, que el nuevo CPP trata el problema cautelar con un enfoque eminentemente procesalista de teoría general del proceso

constituyendo a la instrumentalidad, la proporcionalidad y la excepcionalidad como vías de acceso a todas las medidas precautorias o asegurativas. Organiza primero un capítulo destinado a la **mecánica común de las medidas cautelares**⁴, el cual contiene normas –fundamentalmente las de los arts. 205 y 208– que operan como llave maestra de todo el sistema, para luego dedicar un capítulo a la coerción personal⁵, y otro a la real⁶.

Quien pretenda desentrañar la problemática de la **coerción personal**, respetando la coherencia interna del nuevo CPP de Santa Fe deberá, entonces, analizar primero la mecánica común de las cautelares, para recién después pasar al capítulo que le interese profundizar. Esto, claro, porque toda técnica de interpretación jurídica manda que cuando la ley otorga un espacio a la «parte general» de un instituto o programa, es ésta la que se aplica a todo aquello que no haya sido tratado específicamente en la «parte especial»⁷.

2. Pues bien, mediante el juego armónico del articulado pertinente, el legislador subrayó primero el factor INSTRUMENTALIDAD, descartando de plano que las restricciones a la libertad personal, de fuente cautelar, sea cual fuere su magnitud (art. 208), y hasta la de mayor impacto sobre el derecho a la libertad ambulatoria del imputado, como es la prisión preventiva (art. 219 inc. 3º) puedan justificarse a través de los fines de la pena, circunscribiendo este tipo de medidas al

Claves Judiciales

La autonomía de la coerción personal de bajo impacto
(En el sistema cautelar del nuevo CPP de Santa Fe)

logro de objetivos procesales, como la preservación de la prueba y la vinculación del imputado al proceso. En línea con ello, requirió que el riesgo procesal sea inminente, de manera que la medida precautoria aparezca, no sólo como necesaria, sino también como de urgente despacho (art. 205 inc. 2°).

Aunque discutible desde otros puntos de vista, no cabe duda que la correcta aplicación de este presupuesto juega como regla de garantía, en tanto impide que la coerción personal se use por retribución o castigo, por prevención especial, por prevención general disuasiva, por prevención general integradora etc., vale decir, prohíbe aplicar medidas asegurativas como anticipo de pena, en línea con lo que establece el art. 18 de la Constitución Nacional. La **Corte Interamericana de Derechos Humanos** (Corte IDH), en la sentencia de 21/11/07, sobre el caso «Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador», ha establecido que: «...la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar... en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia... ». El mismo Tribunal había sostenido antes, en la sentencia de 12/11/97, del caso «Suárez Rosero vs. Ecuador», que: «... 77. ...De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para

asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva... ».

La instrumentalidad, a su vez, impide esgrimir fines peligrosistas sustanciales, como el tan frecuentemente requerido en el discurso mediático –y reciclado en los Códigos Procesales Penales argentinos–, de impedir que el imputado «continúe con la actividad delictiva»⁸. Este objetivo, que por la propia construcción semántica de la frase que lo contiene, desnuda el prejuicio de que el imputado ha cometido el delito que se investiga, afecta ostensiblemente el estado jurídico de inocencia, legal (art. 5) y constitucionalmente protegido (art. 18 CN). En tal sentido, la **Comisión Interamericana de Derechos Humanos** (Comisión IDH), en su informe número 35/07, aprobado el 01/05/07, sobre el caso «José, Jorge y Dante Peirano Basso contra Uruguay», estableció que: «...84. ... se deben desechar todos los demás esfuerzos por fundamentar la prisión durante el proceso basados, por ejemplo, en fines... como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro...».

Lo mismo ocurre cuando el legislador establece que determinados delitos no sean excarcelables, pues en tal supuesto despoja a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental, lesionando intrínsecamente a todos los miembros de

dicha categoría de inculcados, por lo que viola el artículo 2° de la Convención Americana de DH. Del informe citado, extraemos que: «...141....en ningún caso la ley podrá disponer que algún tipo de delito quede excluido del régimen establecido para el cese de la prisión preventiva o que determinados delitos reciban un tratamiento distinto respecto de los otros en materia de libertad durante el proceso... ».

3. Luego, el presupuesto PROPORCIONALIDAD, aparece en cinco manifestaciones que estimamos relevantes, siendo la primera la vinculada con el resguardo de garantías constitucionales y convencionales, como el debido ajuste de la cautelar a un Plazo Razonable⁹. Así resulta de la fijación de un término máximo para el encierro bajo prisión preventiva –dos años prorrogables por uno más– (art. 227 inc. 2° y párrafo siguiente), de la fijación de plazos para la investigación, que una vez vencidos puedan desencadenar la libertad (arts. 289, 290 y 292 in fine), y del establecimiento de un lapso para revisar una resolución denegatoria previa, cuando el argumento sea sólo de índole temporal –60 días– (art. 225¹⁰).

Como puede apreciarse, el digesto santafesino se ha enrolado en el sistema de determinación del plazo razonable de las medidas de coerción mediante términos fijos, impuestos por la ley, que es la opción denominada rígida¹¹, siguiendo el mismo criterio que plasmara el legislador nacio-

nal en la ley 24390.

La segunda manifestación de proporcionalidad, aparece atada al Derecho Penal de fondo, y más específicamente al delito atribuido en el caso concreto y a la pena que eventualmente correspondería aplicar¹². Como consecuencia de ello, si en una audiencia de medida cautelar (arts. 223, 224 y 225) la defensa optara por refutar los argumentos del acusador sobre el hecho atribuido y/o el tipo penal aplicable, serán los jueces quienes deban dirimir tal conflicto, en base a las evidencias que se les presentaren y haciendo jugar plenamente el *in dubio pro reo* (art. 7), pues todo ello podrá tener influencia sobre la resolución a adoptar.

La pena, por su parte, proporciona un dato importante¹³ en cuanto a su especie, monto y modalidad. Respecto a la especie, se observa que sólo las privativas de libertad autorizan el dictado de una prisión preventiva (art. 219 inc. 2°). Sobre el monto, el mismo debe ser tenido en cuenta tanto para impedir que el tiempo soportado por el imputado bajo prisión preventiva, sea mayor que el del encarcelamiento efectivo que razonablemente pudiera corresponderle en caso de condena (art. 227 inc. 1°), como para abrir la discusión sobre el riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio (art. 220 inc. 1°), siendo que en este último supuesto, salvo cuando mediaran otros factores, debería descartarse el encierro en el caso de penas de bajo monto. Y finalmente sobre la modalidad, porque la

medida cautelar más severa, requiere que el pronóstico de condena sea a una pena privativa de libertad «de efectiva ejecución» (art. 219 inc. 2°).

Cabe formular aquí una breve digresión, para recordar que la Comisión IDH, en «Peirano Basso», tras destacar que el riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación debe estar fundado en circunstancias concretas, admite que las legislaciones puedan establecer: «...**presunciones iuris tantum** sobre este peligro, basadas en circunstancias de hecho que, de ser comprobadas en el caso concreto, podrán ser tomadas en consideración por el juzgador para determinar si se dan en el caso las condiciones de excepción que permitan fundamentar la prisión preventiva...». El mismo criterio adoptaron los Jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, en la causa Nro. 7480 del registro de la Sala II del Cuerpo, caratulada «DÍAZ BESSONE, Ramón Genaro s/recurso de casación» Acuerdo N° 1/2008, en Plenario N° 13, de fecha 30/10/08, al analizar la naturaleza de los obstáculos objetivos para el otorgamiento de la libertad durante el proceso.

Empero, la consideración de tales obstáculos (p.ej. un determinado monto de pena máxima) como presunciones *iuris tantum*¹⁴, flaco favor le hace a los derechos del imputado, porque si se trataran de tales presunciones, las mismas tendrían pleno valor hasta tanto fueran destruidas mediante prueba en contrario, cosa que

no le interesaría hacer al acusador. Ergo, se estaría asignando una carga probatoria al imputado, siendo que esto transgrede el *in dubio pro reo*. Los obstáculos objetivos a la libertad, afirmamos, sólo deben operar como guías o pautas que deben confirmarse en el caso concreto por parte de quien tenga interés en la imposición de la cautelar. En este último sentido se orientan el voto de la Dra. Ángela Ledesma, en «Díaz Bessone»¹⁵, y calificada Doctrina¹⁶.

Aunque resulte a todas luces evidente, no está de más recordar que para que puedan efectuarse los análisis de proporcionalidad a que refiere este capítulo, resulta indispensable que al resolver la audiencia de medida cautelar los jueces efectúen una calificación legal del delito atribuido, con cita de las disposiciones aplicables.

La tercera nota de proporcionalidad, refiere a la repercusión del hecho en la esfera del Derecho Civil, y tiene en cuenta la importancia del daño a indemnizar como factor de riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio; así como la actitud que el imputado hubiera adoptado voluntariamente frente al mismo daño y al resarcimiento del damnificado (220 inc. 2°).

La doctrina critica la inclusión de este tema como pauta para establecer riesgos procesales vinculados con la coerción personal, pues –dice– puede jugar de manera extorsiva para el imputado, constriñéndolo a resarcir

Claves Judiciales

La autonomía de la coerción personal de bajo impacto
(En el sistema cautelar del nuevo CPP de Santa Fe)

el daño para que no se presuma que intentará eludir el juicio y, así, ser encarcelado preventivamente¹⁷.

Más allá de que este extremo civil no parece tener cabida en la lógica del sistema cautelar penal, su adecuada inteligencia –dado que las reglas de interpretación jurídica mandan otorgar sentido a todas las normas dictadas por el legislador¹⁸– aconseja limitar su incidencia a la actividad del querellante, y obliga a los jueces a extremar su precaución para evitar comportamientos extorsivos, y para que no sea la capacidad económica la llave que abra o cierre una celda.

La cuarta arista de proporcionalidad se relaciona con la materia Procesal, y más concretamente con la evidencia o la prueba, pues teniendo en cuenta la dosis probatoria requerida para cada momento del proceso, será menester acreditar apariencia de responsabilidad en el titular del derecho a afectar por la medida cautelar (art. 205 inc. 1°), o la existencia de elementos reunidos en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que autoricen a atribuir el hecho al imputado (art. 214), o la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probable autoría o participación punible del mismo en el hecho investigado (art. 219 inc. 1°).

El mérito de la prueba sobre la responsabilidad del imputado, y sobre la existencia y tipicidad del delito atribuido, integran el concepto de «mérito

sustantivo» o «*fumus bonis iuris*», el cual debe analizarse como **presupuesto** de la imposición de una medida cautelar, sea para abrir el estudio de los riesgos de fuga y/o de entorpecimiento probatorio, si se encuentra presente, o sea para cerrarlo, si no lo está¹⁹. Así opinan, dentro de un marco de singular consenso doctrinario, LEDESMA y BOVINO, destacando este último que en la gran mayoría de los casos el mérito sustantivo ha sido utilizado de un modo inverso al expuesto.

Según nuestro criterio, el **fundamento** de la imposición de las cautelares que nos ocupan debe versar sobre aquellos riesgos de fuga y prueba, pero sin que ello signifique que el «*fumus bonis iuris*», que fuera considerado como presupuesto, no pueda regresar a la mesa de la discusión cautelar como «**fundamento del fundamento**», vale decir, como razón por la cual la mejor evidencia puede, según las particularidades de cada caso, redundar en mayor riesgo para los fines del proceso²⁰. Uno ejemplo de ello podría darse cuando la evidencia de cargo enderece la causa hacia una muy probable condena, capaz de generar perjuicios al hoy imputado que razonablemente este quisiera evitar, pues entonces cabría tomar mejores recaudos para que no se produzca una evasión, ni se impida que la evidencia vulnerable se convierta en prueba.

Lo que desaprobamos, entonces, es que un presupuesto como el mérito sustantivo sea usado como funda-

mento de la imposición de una medida cautelar, **soslayando el estudio de su incidencia sobre el riesgo procesal**, pero no que pueda ser utilizado como uno de los fundamentos de dicho juicio de riesgo. Cuando el mérito sustantivo sea considerado como presupuesto, lo más importante será verificar si la evidencia de cargo se encuentra presente en calidad y magnitud; en cambio, cuando juegue como fundamento del riesgo, lo más relevante será establecer su eventual vulnerabilidad y su incidencia como motivación de fuga, dado que a mayor riesgo, mayor será el tipo y la intensidad de la medida cautelar necesaria para conjurarlo.

Frecuentemente se ha censurado en doctrina que el peligro procesal se justifique mediante especulaciones abstractas y no a través de hechos concretos. Así se ha dicho que sólo se puede someter a una medida cautelar a quien ha preparado efectivamente una fuga, o a quien ha tratado de perturbar efectivamente una prueba. Nuestra tesis de valoración del mérito sustantivo como uno –y sólo uno– de los fundamentos (motivos) del fundamento (riesgo) que autoricen la aplicación de una medida asegurativa, es pasible de esa crítica, pero entendemos que cuando se requieren hechos concretos, no se hace más que exigir **mejor respaldo** de lo que no deja de ser una especulación a futuro, pues la prisión preventiva que se aplique al imputado que hizo preparativos concretos para fugarse, o trató de perjudicar en los hechos la recolección

de una evidencia, nunca podrá concebirse como un castigo por lo que hizo contra los fines del proceso, sino como una nueva especulación a futuro, o como un indicador más sólido de que volverá a intentarlo. Esta conclusión de que podría persistir en el intento abortado o efectuar uno nuevo, también merecería, entonces, la crítica de que se especula sobre un hecho futuro de imposible certeza hasta que ocurra. Lo cierto es que en la materia precautoria, siempre es necesario efectuar pronósticos hacia el futuro, porque si así no fuera, no podría resguardarse el derecho hasta que sea violado, pues recién allí podríamos tener la certeza de que merecía custodia. Lo que debe exigirse al juez, entonces, no es que deje de proceder en vista de escenarios futuros, sino que sea cuidadoso, restrictivo, estricto, razonable, garantizador y serio al pronunciarse sobre ellos.

También sobre la prueba, aunque ahora sobre la exclusivamente dirigida a demostrar que el imputado estará presente y no perjudicará la normal evolución del proceso, juegan, entre otros factores, el comportamiento adoptado en el caso actual o en otros anteriores o concomitantes (220 inc. 4°), su domicilio fijo (220 inc. 3°), el hecho de que tenga trabajo estable, ingresos, familia a cargo etc. Será tarea del acusador el demostrar que estos factores juegan en contra del imputado; pero hace a la buena praxis defensiva el aprovechar el contacto personal con el imputado para

obtener datos útiles para acreditar su buen comportamiento y su arraigo.

Puede afirmarse, y con rigor, que la temática de este capítulo fue subestimada en el modelo inquisitivo, pero que ahora va ocupando paulatinamente el sitio que le corresponde en las audiencias orales, hasta el punto de ser la que con mayor frecuencia convoca la presencia de testigos, pues la Defensa puede traer, por ejemplo, al familiar que se ofrece para hacerse cargo del cuidado y la custodia del imputado, o a la persona que le daría trabajo, o al vecino que da cuenta de la antigüedad de su radicación etc., todos los cuales difícilmente hayan declarado en el legajo fiscal de investigación.

Finalmente, la quinta, y quizás más relevante manifestación de proporcionalidad, invita a cotejar si el riesgo que se quiere paliar o morigerar mediante la medida precautoria seleccionada, justifica el daño al derecho de libertad individual sobre el cual recae (art. 205 inc. 3°).

Decimos de la importancia de este capítulo de análisis, porque opera a modo de síntesis, como un instrumento adecuado para testear la efectividad garantizadora de todos los anteriores.

4. La EXCEPCIONALIDAD, por último, se pone de manifiesto cuando la ley procesal manda que la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites **absolutamente indispensables** para evitar el entorpecimiento

probatorio en la investigación o el juicio y asegurar la actuación de la pretensión punitiva (art. 10) y que será interpretada **restrictivamente** toda disposición legal que coarte la libertad personal (art. 11), que es un deber de los jueces preferir la cautelares de bajo (art. 221), o mediano impacto (222), si con ellas alcanza para resguardar los fines del proceso, y que todo mecanismo limitador de un derecho de libertad ambulatoria debe ser posible de revisar periódicamente (arts. 206 y 225).

Cabe consignar que el carácter excepcional del encarcelamiento preventivo surge básicamente de la combinación entre el derecho general a la libertad ambulatoria (art. 14 y 75 inc. 22 de la CN y art. 8.2 CADH y 14.2 PIDCyP) y la prohibición de aplicar una pena antes de obtener una sentencia condenatoria firme (art. 18 y 75 inc. 22 de la CN, art. 9.1 del PIDCyP y art. 7 CADH)²¹, pero se refuerza cuando se establece que «...La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general...» (art. 9 inc. 3° del PIDCyP). La Corte IDH, en el precedente «Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador», requirió que las medidas asegurativas «...sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado

Claves Judiciales

La autonomía de la coerción personal de bajo impacto
(En el sistema cautelar del nuevo CPP de Santa Fe)

que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional... ».

Por supuesto que será el uso responsable, y el juego sincronizado y razonable de todos los requisitos y presupuestos hasta aquí examinados, lo que redundará en el mejor resguardo de los derechos y garantías comprometidos por la materia cautelar.

5. Esquemáticamente, entonces, podemos presentar la siguiente sinopsis de las normas del Código Procesal Penal de Santa Fe que resultan de necesario análisis antes de imponer –o al tiempo de revisar– una medida precautoria, a saber:

5.1- Instrumentalidad:

5.1.1- riesgos procesales: 208, 219 inc. 3°.

5.1.2- urgencia: 205 inc. 2°.

5.2- Proporcionalidad:

5.2.1- Constitucional (plazo razonable) 227 inc. 2° y último párrafo, 292 in fine, 225.

5.2.2- Penal (delito y pena)

5.2.2.1- especie: 219 inc. 2°.

5.2.2.2- monto: 227 inc. 1°, 220 inc. 1°.

5.2.2.3- modalidad: 219 inc. 2°.

5.2.3- Civil 220 inc. 2°

5.2.4- Procesal (prueba)

5.2.4.1- del hecho: 205 inc. 1°, 214 y 219 inc. 1°.

5.2.4.2- de la vinculación del imputado: 220 incs. 3° y 4°

5.2.5- Conglobante: 205 inc. 3°.

5.3- Excepcionalidad:

5.3.1- indispensabilidad: 10.

5.3.2- interpretación restrictiva: 11.

5.3.3- preferencia de cautelar menor: 221, 222.

5.3.4- revisión periódica: 206, 225.

6. Ahora bien, luego de hacer este traslado de la teoría general de las cautelares a las medidas de coerción personal, y establecer la interpretación restrictiva, cabe preguntarnos si el legislador santafesino estableció una nómina estricta de dichas medidas, como un *númerus clausus*, del cual no puedan apartarse ni el juez ni las partes.

Resulta oportuno recordar aquí que toda esta materia, no obstante ser de raíz netamente procesal, merece una interpretación restrictiva, similar a la que corresponde aplicar al tipo del Derecho Penal de fondo, apegada a la lógica formal deductiva de corte matemático; mientras que la regla en «lo procesal», consiste en que los institutos de tal naturaleza gocen de una interpretación extratípica, propia de la lógica dialéctica, con el auxilio de la retórica y la tópica. Particularmente ilustrativo sobre estos métodos de interpretación es lo explicado por el maestro Ramón Teodoro Ríos en su excepcional voto del caso ZALAZAR, cuya íntegra lectura se recomienda²².

En nuestro caso, el legislador tipificó varias cautelares relativas a la libertad ambulatoria del imputado en el Libro II, Título III, Capítulo II del CPP, es decir, en el capítulo destinado a la parte especial de las medidas de coerción personal. No nos deten-

dremos ahora en aquellas que se encuentran destinadas a asegurar los primeros momentos del proceso y que el investigador –o sus colaboradores– pueden despachar o efectuar inaudita parte, como la citación (art. 210), el arresto (art. 211), la aprehensión (art. 212), la detención (art. 214) y la incomunicación (art. 215). Si nos interesan, en cambio, las dotadas de mayor proyección temporal dentro del proceso y que sólo pueden ser impuestas por un juez, a pedido de parte y previo oír a la contraria en audiencia pública, como las enumeradas en los arts. 221 y 222 del CPP²³.

Pues bien, echa de verse que en el encabezamiento del art. 221, el legislador dejó abierta la posibilidad de aplicar otras cautelares no incluidas en la nómina de sus cinco incisos, en tanto el mismo reza: «Entre otras alternativas, aún de oficio, y con fundamento suficiente, podrá disponerse la libertad del imputado sujeta a una o a varias de las condiciones siguientes...».

El párrafo citado y más específicamente la expresión «**Entre otras alternativas**», parece invitar al intérprete a concebir una cautelaridad abierta, en la que el fiscal pueda pedir y el juez imponer medidas completamente novedosas, que impliquen limitaciones realmente atípicas sobre el derecho de libertad ambulatoria; pero como esto representaría un severo riesgo para los derechos del imputado, creemos prudente fijar límites razonables a este espacio de aparente informalidad.

En primer lugar, entendemos que las «otras alternativas» a las que alude el codificador tienen que provenir de fuente legislativa actual²⁴ o futura²⁵ o, en defecto de ello, derivar de alguna de las cautelares previstas en forma expresa. En este último caso, y por razón de excepcionalidad (ver punto 5), la medida «derivada» tendrá que ser de igual o menor intensidad que la «expresa», pero nunca más grave. Con este norte, podría admitirse, por ejemplo, la obligación del imputado de acreditar su presencia en un determinado sitio, no ya mediante una presentación personal ante la autoridad que se le fije, sino a través de recursos informáticos (221 inc. 2°), o la prohibición de comunicarse con ciertas personas mediante redes sociales (221 inc. 3° último supuesto)²⁶ etc.; pero no la obligación de llevar un dispositivo de control como las llamadas pulseras magnéticas o los GPS, porque estos instrumentos significarían un plus respecto de la prohibición de salir de un ámbito territorial determinado o de concurrir a determinados lugares (art. 221 inc. 3° primer y segundo supuesto). Cuando las medidas derivadas tengan matices que puedan tornarlas más gravosas, como la última comentada, sólo podrían aplicarse con el consentimiento del imputado, y en su favor, de un modo análogo a cómo funciona la atenuación de la coerción (art. 222).

Pues bien, como el art. 221 remite en su primer párrafo a soluciones alternativas respecto de la prisión

preventiva²⁷, y establece que podrá disponerse la libertad del imputado, sujeta a una o varias de las mismas, es dable afirmar que, desde una perspectiva «de arriba hacia abajo», no se presentarán problemas al intérprete, ni al juez, que tras establecer la procedencia de la prisión preventiva en abstracto, o revisar su imposición en concreto –con ajuste al art. 219–, deberán «bajar» hasta la medida alternativa suficiente para cumplir los fines de resguardo procesal.

7. En cambio, si reflexionamos experimentalmente sobre una hipótesis distinta, en la que no se encuentren reunidos todos los requisitos del inciso 2° del aludido art. 219, es decir, en la que la pena no sea privativa de libertad y/o en la que no resulte razonable²⁸ estimar que en caso de condena, la pena privativa de libertad será de efectiva ejecución, cabe preguntarse si de todos modos podría aplicarse alguna cautela personal de bajo impacto.

A la respuesta negativa le llamaremos punto de vista **sustitutivo**, a la afirmativa, **autónomo**.

Imaginando escenarios posibles, podríamos pensar en un imputado al que se le atribuyera el delito de malversación de caudales públicos (art. 260 CP) o –ahora con el agregado de carecer de antecedentes– el de estafa (art. 172 CP), y realizara actos destinados a perturbar la investigación, como manipular asentamientos con tables de una persona jurídica y tra-

tar de influir sobre eventuales testigos. Si aplicáramos el criterio de que tienen que estar reunidas todas las condiciones del art. 219, para recién después «bajar» desde la prisión preventiva hasta alguna medida sustitutiva, a este imputado ni siquiera sería posible prohibirle *concurrir a determinados lugares o comunicarse con ciertas personas* (art. 221 inc. 3°), lo que resulta a todas luces irrazonable. Ejemplos como estos podrían multiplicarse, llegando incluso a involucrar territorios particularmente sensibles como los de la violencia familiar, o la violencia de género.

Pensemos sino dentro del último rubro, en un delito de pena baja, como las lesiones leves dolosas (art. 89 CP), presuntamente cometido por un imputado que carece de antecedentes. Agreguémosle también que la víctima es una mujer, y que la agresión –a manos de un hombre–, se basó en su género²⁹. Pues bien, es claro que el caso no reúne las condiciones del art. 219, por lo que no sería viable el dictado de una prisión preventiva ni –si seguimos la lógica «sustitutiva»–, de otras cautelares de vinculación al proceso³⁰. No obstante ello, el caso no admitiría una suspensión a prueba, porque el Estado Argentino se ha comprometido a dilucidar en juicio las presuntas violencias de género (conf CSJN «Góngora»³¹). Ergo, el Estado estaría obligado a llevar el caso a juicio, pero no podría aplicar ninguna medida para asegurar la presencia del imputado en el mismo, ni tan si-

Claves Judiciales

La autonomía de la coerción personal de bajo impacto
(En el sistema cautelar del nuevo CPP de Santa Fe)

quiera una simple promesa jurada.

En casos de violencia familiar, tal vacío legal tampoco podría ser cubierto a través de las medidas autosatisfactivas que enuncia la ley 11529, pues las mismas sólo están enderezadas a «...proteger a la víctima; hacer cesar la situación de violencia, y evitar la repetición de hechos de agresión o malos tratos...» (Art. 5), respecto de «...todas aquellas personas que sufriesen lesiones o malos tratos físicos o psíquicos por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar... surgido del matrimonio o uniones de hecho, sean convivientes o no, comprendiendo ascendientes, descendientes y colaterales...» (Art. 1), pero no a resguardar la prueba ni a vincular al imputado a un proceso penal³².

Lo irrazonable, en definitiva, salta a la vista, y consiste en que para aplicar una medida cautelar de bajo impacto, proporcional a una hipótesis de riesgo procesal bajo o medio, deba sortearse el baremo –el muy alto baremo– de la de mayor impacto, como es la prisión preventiva (art. 219).

Ahora bien, según nuestro criterio, el problema planteado resulta ser sólo aparente, porque como dijéramos en el punto 2, la mecánica común de las medidas cautelares cuenta con una llave maestra que permite ensamblar las piezas y armonizar el funcionamiento del sistema. Los arts. 205/208 del CPP –la llave de marras–, proporcionan el marco normativo aplicable a todas las medida de coerción real o

personal, pues enumeran y monopolizan los presupuestos y requisitos que deben reunirse para la imposición de las mismas, con la única excepción de aquella/s que haya/n recibido una regulación especial en otra parte del Código. En este último supuesto, como ocurre con la prisión preventiva, habrá de aplicarse primero la normativa específica y recién después, subsidiariamente, la general.

En sincronía con ello, afirmamos entonces que:

1) Si el caso reúne los requisitos del art. 219 del CPP –**supuesto contemplado en la parte especial**–, todas las medidas de coerción personal que se encuentran por debajo de la prisión preventiva obrarán de manera «sustitutiva», y se aplicarán en forma descendente³³, limitándose las normas generales de los artículos 205/208 a regir en subsidio, sólo para aquellos temas no modificados por la disposición específica.

2) En cambio, cuando no se encuentren reunidos los requisitos del art. 219 del CPP –caso no previsto en la parte especial–, las medidas cautelares de bajo impacto operarán de manera «autónoma», en forma ascendente desde la promesa jurada, y en los términos de los arts. 205/208 del CPP. En esta especie, la medida precautoria aplicable nunca podrá llegar a la prisión preventiva ni a herramientas de encierro efectivo (art. 222 inc. 1º y 2º), pero se modulará en base al juego de la excepcionalidad

general (que abarca a todas las cautelares), la instrumentalidad propia de las medidas de coerción personal (basada en riesgos de fuga o entorpecimiento probatorio), y su propia proporcionalidad³⁴.

Sumado a todo lo antes expuesto, y a favor de nuestra tesis de aplicación autónoma, consideramos no menor que el art. 223 del CPP, en su redacción original, refería a la audiencia del art. 224 como de **prisión preventiva**, mientras que hoy, reformado por la ley 13.231, lo hace como de **medida cautelar**, lo que contribuye a reafirmar que en tal audiencia el fiscal no está obligado a ir por «lo más», para luego poder pedir «lo menos».

8. Nuestro enfoque, cabe admitirlo, parece beneficiar en primer término a la parte interesada en la imposición de la cautelar, como el fiscal o el querellante y, desde ese ángulo, podría ser blanco de críticas por violar la interpretación restrictiva que manda el art. 11 CPP. Empero sostenemos que no debe confundirse interpretación restrictiva con ausencia de interpretación, ni con interpretación irrazonable, ni mucho menos con interpretación asistemática. Sabido es, que la inteligencia de una norma, toma sentido cuando se la considera como un eslabón de un programa o sistema organizado desde la lógica legislativa, y no cuando se la aísla como si fuera un compartimiento estanco. Con WRÓBLEWSKI «...podemos decir que el contexto sistémico de una norma jurídica

ca influencia su interpretación y, por lo tanto, es posible distinguir un completo conjunto de directivas de interpretación que prescriben cómo usar esa influencia en la actividad interpretativa...»³⁵.

Por otra parte, no nos cabe duda que en la realidad cotidiana, el primer beneficiario de esta tesis será el propio imputado, pues la habilitación de cautelares leves, para casos leves, evitará que el sistema se corrompa, tolerando el uso de cautelares graves para los mismos casos leves. La experiencia indica que en cuestiones como los que imagináramos en el punto 6, no sería extraño que al imputado de malversación de caudales públicos que no pueda prohibírsele el ingreso al lugar donde se encuentren las pruebas de cargo que él procurara alterar, termine perseguido por un delito que tenga pena de prisión, como el peculado (art. 261 CP); o que el imputado de estafa, aún carente de antecedentes, sea pasible de un pronóstico de pena privativa de libertad de efectiva ejecución³⁶, que tornara viable un encierro preventivo (art. 219).

La «burla» al sistema de aseguramiento, ocasionada por una interpretación disfuncional del mismo, abriría una brecha por donde podría filtrarse un brote «justiciero» nada desconocido en la cultura judicial vernácula³⁷, que con el fin de lavar la afrenta, termine haciendo que el imputado pague los platos rotos.

9. En otro orden de ideas, no encontra-

mos impedimento legal alguno para que el acusador y el imputado puedan acordar limitaciones a la libertad de este último, similares a una medida cautelar –como podría ser el no comunicarse con determinadas personas o no concurrir a determinados sitios–, antes de que tome intervención un juez, si el imputado estuviera detenido (art. 218), o aún después, si estuviera en libertad. Empero, estos acuerdos, y el correlativo «compromiso» asumido por el imputado, no tendrían el carácter de una medida cautelar, ni su incumplimiento acarrearía las mismas consecuencias.

En lo estrictamente procesal, si se utilizara la herramienta del acuerdo entre las partes, el fiscal tendría dos caminos a seguir, según procure obtener mayor o menor formalidad. Uno consistiría en presentar el acuerdo ante el juez de la IPP, en una audiencia de medida cautelar «autónoma» (ver punto 8, 2), en los términos del art. 224, pues de tal manera –si el acuerdo fuera homologado–, lograría el despacho formal de una medida asegurativa cuyo incumplimiento pudiera desencadenar la audiencia del art. 225. Otro, sería el de conservar el acuerdo en la órbita de la fiscalía y controlar su cumplimiento, cosa que no dudamos que en la mayoría de los casos cumpliría con su cometido y economizaría recursos. En esta última hipótesis, el incumplimiento del acuerdo por parte del imputado podría ser esgrimido por el fiscal en una audiencia de medida cautelar del art.

224, no sólo como evidencia de peligro procesal, sino también como dato no menor para estimar que la medida precautoria «similar» a la de la conducta ya transgredida, resultaría ahora insuficiente para cumplir su fin de resguardo, y procurar que el juez imponga otra más intensa.

El acuerdo de las partes tendrá sólo el rango de tal y será obligatorio entre ellas por razones de lealtad (art. 132), pero podrá cobrar relevancia, como índice de riesgo, en caso de ser violado.

El juez, en cualquier caso, podrá reducir la intensidad cautelar pautada por las partes, si la considerara excesiva, pero nunca aumentarla.

No compartimos el criterio de que el fiscal pueda **imponer** las condiciones del art. 221, y que en tal caso el afectado tenga la posibilidad de objetarlas ante el juez de la IPP³⁸. Ello, por cuanto afirmamos que para que exista una cautelar *de resguardo de la prueba y/o de impedimento de fuga* como las del art. 221, que requieren bilateralidad y audiencia, la misma debe ser impuesta por un juez, pues las excepciones a la jurisdiccionalidad, deben ser establecidas expresamente por el legislador. No es argumento valedero que si el fiscal puede detener, puede también ordenar una medida que no signifique encierro –quien puede más, puede menos–, porque no deben mezclarse las medidas iniciales, de urgente despacho inaudita parte, con las posteriores, que requieren sustanciación en audiencia y despacho

Claves Judiciales

La autonomía de la coerción personal de bajo impacto
(En el sistema cautelar del nuevo CPP de Santa Fe)

jurisdiccional. Y porque aún si se autorizara dicho cotejo en abstracto –lo que, como quedó expuesto, descartamos, porque los fiscales no pueden reemplazar a los jueces en aquellos supuestos en los que estos están llamados a resolver conflictos³⁹–, la intensidad de la primera, moderada por su breve vida, no sería más que la intensidad de la segunda, agravada por su duración en el tiempo y sus variadas prohibiciones.

Cerramos estas reflexiones, procurando activar la discusión sobre la problemática abordada, e invitando una vez más a reflexionar sobre la cautelaridad «de aquí y ahora», en la convicción de que esa es la base para que los derechos de las personas puedan salir de los textos y hacerse fuertes en la vida real. ■

myf

464

¹ Juez de Segunda Instancia de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe. Miembro del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Profesor Adjunto -Titular Interino- de la materia Derecho Procesal Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Profesor titular de la misma materia en el Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Docente de posgrado.

² ERBETTA, DANIEL – ORSO, Tomás – FRANCESCHETTI, Gustavo – CHIARA DÍAZ, Carlos «NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SANTA FE COMENTADO LEY 12734» pág. 400 y sig.; ZEUS SRL, Rosario, 2008.

³ Aunque obvio, es dable acotar que también existe una coerción propia del Derecho Penal de fondo, materializada fundamentalmente mediante la pena. Ver MAIER, Julio B. J. «DERECHO PROCESAL PENAL – I. Fundamentos» pág. 513; Editores del Puerto S.R.L., Bs. As., 2004, 2ª. Edición, 3ª. Reimpresión.

⁴ Se trata del LIBRO II – Actividad procesal, Título III- Medidas cautelares, Capítulo I- Reglas generales; arts. 205 a 208 bis.

⁵ LIBRO II – Actividad procesal, Título III- Medidas cautelares, Capítulo II- Coerción personal; arts. 209 a 236.

⁶ LIBRO II – Actividad procesal, Título III- Medidas cautelares, Capítulo III- Coerción real; arts. 237 a 244.

⁷ Ver, por todo, MASSINI CORREAS, Carlos I., «Determinación del derecho y directivas de la interpretación jurídica».

⁸ El Comité de Derechos Humanos, interpretando el art. 9.3 PIDCP supo desviarse del criterio «instrumental» en la comunicación número 432/1990, aprobada el 23 de octubre de 1992, en el caso "W.E.B. contra Holanda" sosteniendo que: "la detención preventiva debe ser necesaria, por ejemplo, para asegurar la presencia del acusado en el juicio, impedir la interferencia con testigos y otra evidencia o la comisión de otros delitos...», pero luego rectificó su rumbo en la comunicación 560/1993, aprobada el 03/04/97, sobre el caso "A. contra Australia", diciendo que: "la detención preventiva podría considerarse arbitraria si no está justificada en todas las circunstancias del caso, por ejemplo, para impedir la fuga o el ocultamiento de pruebas".

⁹ El plazo razonable de la privación de li-

bertad durante el proceso, ha sido motivo de informes de la Comisión IDH y de fallos de la Corte IDH, según reseña y analiza ALBANESE, Susana «El plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales» en la publicación general conmemorativa del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, titulada LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS POR LOS TRIBUNALES LOCALES, págs. 260/270; Editores del Puerto SRL, Bs. As., 1998.

¹⁰ En este último caso, puede aducirse –y con acierto– que las garantías constitucionales no juegan a favor del Acusador Público, que es quien tendría interés en el mantenimiento de la cautelar por esos sesenta días; pero no debe perderse de vista que si lo hacen en pro del imputado, que puede promover la audiencia después de ese moderado lapso, aún cuando no se hubieran producido novedades de ninguna índole que mejoraran la situación que existía al tiempo del despacho de la cautelar

¹¹ La otra manera de calcular el plazo razonable, que suele preferirse para poner límite temporal al proceso todo, es de fuente jurisprudencial (Corte Europea DH, Corte IDH, CSJN, CSJSF) y se denomina flexible, pues

depende de variables tales como la complejidad del caso, el desempeño de los órganos oficiales y el comportamiento de los particulares, siempre diferentes en cada caso. Se nos ocurre también en una tercera opción, que denominaríamos mixta, en la que se establezca un tope rígido que no pueda excederse por ningún motivo y en ningún proceso, por debajo del cual se apliquen las variables flexibles.

¹² Recientemente, la CSJN se ha pronunciado en el caso «LAYO FRAYRE», de fecha 06/03/14, Expte. letra L. 193. XLIX. RECURSO DE HECHO Loyo Fraire, Gabriel Eduardo s/ p.s.a. estafa reiterada - causa n° 03/2013. La corte se remite al dictamen del procurador Casal, quien a su vez lo hace respecto a su dictamen en el caso «MERLINI», letra M. 960, XLVIII, -Merlini, Ariel Osvaldo s/p.s.a estafa procesal», descartando de el delito o el monto de la pena sean el argumento basado de la prisión preventiva.

¹³ CUENCA, DANIEL O. «Propuestas de cambio para el tratamiento de la libertad en el proceso penal» en Revista aludida en la cita n° 16, pág. 219.

¹⁴ La consideración de los mismos como presunciones iuris et de iure, sin duda que empeoraba la situación de los imputados, pues

Claves Judiciales

La autonomía de la coerción personal de bajo impacto
(En el sistema cautelar del nuevo CPP de Santa Fe)

los tornaba de aplicación inevitable, y fuente de la tan conocida frase «otorgaría la libertad, pero la ley no me deja».

¹⁵ LEDESMA - Dijo la jueza citada que «...de modo alguno podríamos exigir que sea el imputado quien produzca dicha prueba (aunque podrá aportar aquella que estime necesaria), toda vez que -como dijimos- es el Estado (fiscal...) quien debe acreditar que existe riesgo concreto de frustración de los fines del proceso».

¹⁶ CHIARA DIAZ, CARLOS A. «El Proceso Penal y la Coerción Personal» artículo publicado en la REVISTA DE DERECHO PROCESAL PENAL, Año 2005 «EXCARCELACIÓN» pág. 13/33; RUBINZAL CULZONI, Santa Fe, Agosto 2005. Entre otros autores.

¹⁷ ERBETTA, ORSO, FRANCESCHETTI, CHIARA DÍAZ, Op. Cit. pág. 437.

¹⁸ MASSINI CORREAS, Op. Cit. pág. 9. «... (DI1S-1) «No se debe atribuir a una norma jurídica un significado tal que ella resulte contradictoria y/o incoherente con otras pertenecientes al mismo sistema». Y, consecuentemente, debe aceptarse la siguiente directiva: (DI1S-2) «Debe atribuirse a toda norma jurídica aquel significado que la haga lo más

coherente posible con el resto de las normas del sistema...».

¹⁹ Cfr. BOVINO, Alberto «Aporías», Ponencia General presentada en el XXIV Congreso Nacional de Derecho Procesal, realizado del 8 al 10 de noviembre de 2007, Mar del Plata, pág. 853, Rubinzal-Culzoni-2007 – citado por LEDESMA, Ángela, en su voto del caso DIAZ BESSONE.

²⁰ DE OLAZÁBAL, JULIO «La Libertad del imputado», pág. 49; Editorial RUBINZAL-CULZONI, Santa Fe, 14 de Junio de 1991. Sostiene el autor que «...es absolutamente entendible que en la medida en que se perciba más acreditado el hecho y la culpabilidad de un sujeto, se refuercen las cautelas sobre el mismo, y que en cambio cuando los elementos probatorios sobre esos puntos sean débiles, se distiendan...» Y añade enseguida que «...No es éste un parámetro fijo –mucho menos un anticipo de pena para quien parece más responsable– pero si atendible en su entrecruzamiento con los demás...».

²¹ BOVINO, ALBERTO («El encarcelamiento preventivo en los tratados de derechos humanos», publicado en Problemas del Derecho Procesal Penal contemporáneo, Editores del Puerto, Bs. As. 1998, pág. 148/9).

²² Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, en pleno; «Zalazar, Eduardo R.», 22/12/1998, Publicado en: LLLitoral 1998-2, 969, AR/JUR/173/1998.

²³ Aunque no todos los incisos de estos dos artículos refieren a cautelares de tipo «personal», ni el último del 222 merece catalogarse como herramienta cautelar de «encierro» efectivo.

²⁴ Podría ser de una ley nacional, de índole penal, o de una ley provincial externa al CPP.

²⁵ El codificador ha sabido abrir puertas hacia el porvenir legislativo, por ejemplo al dedicar espacio al juicio por jurados (art. 4 in fine).

²⁶ Los mismos añaden la obligación de tolerar el dispositivo y de someterse a una vigilancia monitoreada constante.

²⁷ También lo hace el título del art. 221, pero sabido es que el título nunca integra la norma contenida en el artículo que encabeza.

²⁸ Entendemos, obviamente, que el concepto de razonable nos vincula con lo probable, y que esto significa un plus respecto de lo posible.

²⁹ La Convención de Belem do Pará, en su

art. 1º, establece que: «...Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado».

³⁰ No todas las cautelares pertenecen a la misma especie, pues las hay para convocar al imputado, motivando su voluntad sin reemplazarla, como la citación. Otras para forzarlo a comparecer, como la detención (aunque esta participa también de la siguiente categoría). Y otras para asegurar la vinculación del imputado al proceso o resguardar la prueba, como la promesa jurada, las órdenes de no alejarse o no comunicarse, etc. hasta la prisión preventiva.

³¹ CSJN, 23/04/13, «GÓNGORA, Gabriel Arnaldo s/ Causa N° 14.092», G. 61.XLVIII. Ver tb. «JURISPRUDENCIA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN» Tomo 15, págs. 175/204; Editorial HAMMURABI, Bs. As., 2013).

³² Algo similar ocurre con las medidas de naturaleza autosatisfactiva del art. 207 del CPP, que tampoco están previstas para neutralizar riesgos de fuga o de perjuicio para la prueba.

³³ Incluso las herramientas de atenuación de la coerción que impliquen un encierro morigerado (art. 222).

³⁴ Es el factor proporcionalidad –especialmente en cuanto al tipo, monto y modalidad de pena–, el que por un lado hace que las medidas del art. 222 inc. 1º y 2º no sean aplicables en forma autónoma, por ser de prisionización; y el que, por otro, abre la posibilidad de que si lo sea el inciso 3º del mismo artículo, en cuanto prevé el ingreso del imputado en una institución educadora o terapéutica, pública o privada, que sirva a la personalización del internado en ella, bajo la condición de que el mismo de su consentimiento.

³⁵ WRÓBLEWSKI, JERZY, «*Semantic Basis of the Theory of Legal Interpretation*» (SB), en *Logique et Analyse*, N° 21-24 (La théorie de l'argumentation), Louvain - Paris, 1963, p. 413. Citado por MASSINI CORREAS, Carlos I. en «Determinación del derecho y directivas de la interpretación jurídica».

³⁶ Podría utilizarse aquí el remanido argumento de que en las penas privativas de libertad el cumplimiento efectivo es regla, y la ejecución condicional la excepción.

³⁷ BOBBIO «...La victoria del poder visible sobre el invisible jamás se concluye definiti-

vamente. El poder invisible resiste el avance del visible, reinventa formas para ocultarse y para esconder; para ver sin ser visto...» BOBBIO, Norberto «Estado, Gobierno y Sociedad – Por una teoría general de la política», pág. 37. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, Septiembre de 2006.

³⁸ ERBETTA, DANIEL – ORSO, TOMÁS – FRANCESCHETTI, GUSTAVO – CHIARA DÍAZ, CARLOS «NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SANTA FE COMENTADO LEY 12734» pág. 444.; ZEUS SRL, Rosario, 2008.

³⁹ Esto es de la esencia del modelo acusatorio de proceso, y replica la doctrina sentada por FERRAJOLI, Luigi «DERECHO Y RAZÓN», pág. 140. Editorial TROTTA S.A., Madrid (España), 2009.